

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO ESCOLAR

EXP.: A/SER-036280/2024

TÍTULO: TRASLADO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS DOCENTES DEPENDIENTES DE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

ÍNDICE:

- I. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO
- II. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO
- III. JUSTIFICACIÓN NO DIVISIÓN EN LOTES
- IV. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO
- V. PLAZO DE GARANTÍA
- VI. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. CLASIFICACIÓN. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES
- VII. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
- VIII. SUBCONTRATACIÓN
- IX. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
- X. PENALIDADES Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
- XI. MODIFICACIONES

I. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a continuación, se exponen las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones, y son objeto del contrato de referencia.

La Dirección General de Infraestructuras dispone de diversos acuerdos marco en vigor de suministros (de mobiliario, de cocinas, de material didáctico, de menaje, etc.), y todos ellos incluyen el traslado desde la empresa suministradora hasta el centro educativo destinatario.

Sin embargo, en la actualidad, la Dirección General de Infraestructuras y Servicios carece de personal propio con categoría profesional y de medios materiales adecuados para llevar a cabo el objeto del contrato, una vez finalice la prórroga del vigente contrato, por lo que resulta necesaria la licitación de un nuevo contrato de servicios con una empresa especializada en transporte y mudanzas, que cuente con las habilitaciones y los recursos técnicos, materiales y humanos exigidos.

El fin no es otro que garantizar el traslado de equipamiento, mobiliario y enseres entre los diversos centros educativos de la Comunidad de Madrid, fruto de las necesidades ocasionales que surgen en los mismos, que permitiría a su vez su reutilización, optimizando así las necesidades allá donde se producen, sin tener que recurrir a la constante adquisición de nuevos suministros.

Los objetivos a alcanzar con la contratación son, por tanto, el traslado, desmontaje y montaje, colocación y redistribución del mobiliario y enseres cualquiera de los centros incluidos en el apartado I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Es imprescindible, por tanto, disponer de un servicio que cuente, tanto con los recursos humanos requeridos en el apartado 5 del PPT, como con los medios materiales y técnicos señalados en el apartado 6 del mismo pliego.

La Dirección General de Infraestructuras y Servicios promueve el expediente de contratación de referencia cuyo importe total es el siguiente:

El presupuesto base de licitación del contrato de referencia asciende a 139.682,40 €, siendo su imputación presupuestaria con cargo al subconcepto 22300 "Transporte" del programa 321P (Centro Gestor 150150000) del vigente presupuesto de gastos de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.

II. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

Objeto del contrato

El objeto del contrato es prestar el servicio de traslado, por parte de una empresa

especializada en transporte, de equipamiento y mobiliario escolar, o cualquier otro enser, que precise la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid en su actuación ordinaria para dotar del equipamiento y mobiliario necesario a los centros educativos de la región; desmontaje y montaje del equipamiento y mobiliario sujeto a tornillo o cualquier otro sistema de fijación no permanente existente en las dependencias; embalaje, colocación y redistribución de estos enseres a cualquiera de los centros incluidos, tanto inter como intra centros.

Contrato de servicios según artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Número de referencia del CPV 60100000-9 "Servicio de transporte por carretera" y 63100000-0 "Servicio de carga, descarga y almacenamiento". Número del Código NUTS: ES30).

Duración

La **duración** del contrato será de un año a contar desde el 04/10/2024 o desde la fecha de la formalización, si fuere posterior.

Prórrogas: Sí, por un año.

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 2 años.

División en lotes: No.

III. JUSTIFICACIÓN NO DIVISIÓN EN LOTES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116. 4 g) de la LCSP, así como en el art. 99.3 b), no se prevé la división en lotes del objeto del contrato, que es la prestación del servicio de traslado de mobiliario y enseres entre los distintos centros educativos de la Comunidad de Madrid. Se trata de una serie de actuaciones interrelacionadas de forma que componen una unidad que, al ser ejecutadas por diferentes entidades, provocaría una coordinación extremadamente dificultosa y, en consecuencia, la ineficiente prestación del servicio.

Debe señalarse que las actuaciones contempladas deben realizarse simultáneamente en un mismo espacio físico, en un corto período de tiempo y en perfecta sincronización. Como consecuencia de la interconexión que debe existir, la no división en lotes permite facilitar la uniformidad y homogeneidad del servicio en los distintos centros de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, lo que supone una optimización de recursos, que lleva asociada la reducción de coste y la mejora de la eficacia y la eficiencia del servicio.

Asimismo, se considera que la fragmentación del contrato podría acarrear distorsiones en su funcionamiento no deseables desde el punto de vista de calidad del servicio.

En consecuencia, no se considera conveniente la licitación del contrato dividido en lotes, a fin de evitar una pluralidad de contratistas que perjudique el seguimiento de la ejecución del contrato por este centro gestor y no permita aprovechar las

sinergias de un único adjudicatario en la prestación del servicio y la eficiente ejecución del mismo.

IV. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

3.1. Valor estimado

El valor estimado del contrato es de 230.880 € y para su determinación se ha tenido en cuenta la base imponible total incrementada con la base imponible de la posible prórroga.

CÁLCULO VALOR ESTIMADO	TOTAL
CONTRATO INICIAL	115.440 €
PRÓRROGA	115.440 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	230.880 €

3.2. Presupuesto base de licitación.

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 139.682,40 € de los que 115.440 € representan la base imponible y 24.242,40 € corresponden al IVA (21 %).

V. PLAZO DE GARANTÍA

No procede por la naturaleza del contrato.

VI. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. CLASIFICACIÓN. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, en los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del RGLCAP, o bien, acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de solvencia:

A) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 87.1 apartado a) de la LCSP:

“podrá acreditarse mediante el volumen anual de negocios, o bien, volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente(...)”.

Criterios de selección:

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen de negocios de los tres últimos ejercicios concluidos (2020, 2021, 2022, o en su caso 2023).

El volumen anual de negocios se acreditará por medio de las cuentas anuales del año de mayor volumen de entre los citados, que deberá ser, al menos, igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato (346.320 €)

Para la acreditación del volumen anual de negocios el licitador o candidato deberá aportar las cuentas anuales de los ejercicios citados, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90.1 apartado a) de la LCSP, podrá acreditarse mediante: *“una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos”*.

“(…) Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; (...) en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente”.

Criterios de selección:

Relación firmada por el representante legal del licitador, de trabajos de objeto similar al del presente contrato, efectuados en cada uno de los últimos tres años (2020, 2021 y 2022), admitiéndose también la relación de los servicios prestados en el año 2023 siempre que los servicios relacionados ya hubieran finalizado, que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos.

La acreditación de todos los trabajos relacionados deberá realizarse mediante la presentación de certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la

realización de la prestación.

El importe total acumulado de los servicios certificados, en el año de mayor ejecución dentro de los tres últimos ejercicios disponibles (2020, 2021 y 2022, o en su caso 2023), de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, deberá ser igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato (161.616 €).

CLASIFICACIÓN SUSTITUTORIA

De acuerdo con lo establecido en el art. 37 y ss. del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dado que no existe grupo ni subgrupo de clasificación para estos servicios, procede acreditar la solvencia económica, financiera y técnica exclusivamente con los requisitos y medios de acreditación de los artículos 87 y 90 LCSP que se recojan en el presente apartado.

* COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS [PERSONALES] Y/O [MATERIALES]:

MEDIOS PERSONALES: No procede.

MEDIOS MATERIALES: Sí procede.

Las empresas deben cumplimentar el Anexo correspondiente del PCAP en el que se comprometen a adscribir los medios materiales suficientes para la ejecución del contrato.

Los licitadores, cuando resulten propuestos como adjudicatarios, deberán tener a su disposición los medios especificados en el apartado 6 del PPT.

Se entenderá que el vehículo está a disposición de la empresa, cuando pueda hacer uso del mismo mediante cualquier negocio jurídico admitido en derecho y, además, dicho uso deberá prestarse con su propio personal. El órgano de contratación podrá exigir la acreditación de esta disponibilidad.

VII. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

En aplicación del artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establece como condición especial, de **carácter social** que, al menos, uno de los puestos de trabajo entre el personal adscrito al contrato, esté ocupado por personal incluido en alguno de los siguientes supuestos:

- Personas paradas de larga duración (desempleado inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por periodo superior a 12 meses, sin que haya conseguido empleo en ese tiempo).
- Ser mujer.
- Ser joven (menor de 30 años).

El adjudicatario presentará declaración responsable del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda solicitar información adicional del contratista para verificar su cumplimiento.

Estas condiciones tendrán el carácter de esencial y a tenor de lo dispuesto en el art. 192 LCSP, el incumplimiento de las mismas podrá conllevar la resolución del contrato.

VIII. SUBCONTRATACIÓN.

Sí procede, en los términos previstos en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración y, en caso de exigirlo la normativa, la empresa subcontratada deberá contar con la habilitación legal correspondiente.

En caso de subcontratación, la adjudicataria tendrá que comunicar a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades la subcontratación, a los efectos de seguimiento del contrato y control de accesos.

No obstante, y según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el responsable del servicio designado por la empresa adjudicataria responderá ante la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades como único interlocutor y coordinador de todos los servicios y trabajos descritos en el Pliego, aunque sean subcontratados.

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sí.

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del órgano de contratación como responsable del tratamiento, indicarán en la oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o servicios asociados a ellos, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

IX. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Justificación del procedimiento:

En relación al expediente de referencia se ha optado por un procedimiento de contratación abierto ordinario con pluralidad de criterios.

El procedimiento es abierto para permitir la mayor concurrencia posible de licitadores, favoreciendo de esta forma que la Administración tenga una mayor cantidad de ofertas que permitan la elección más favorable para los intereses públicos. Asimismo, ante la particularidad específica del producto, donde el precio tiene una gran correlación con la calidad, se opta por el procedimiento ordinario con pluralidad de criterios de conformidad con lo dispuesto 131.2 de la Ley 17/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público (LCSP).

Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. Para la adjudicación del contrato se considerarán varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato con el fin de seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, conforme al artículo 145 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Justificación de los criterios de adjudicación:

El motivo de inclusión de estos criterios en el Pliego de Cláusulas Administrativas es disponer de otros criterios de valoración, que no sea únicamente el precio, que garanticen que la ejecución del contrato por parte de la empresa adjudicataria sea más eficiente a la hora de desarrollar los trabajos que aparecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Dichos criterios no se incluyen en el apartado de solvencia técnica o profesional para no limitar la concurrencia en la licitación y disponer así de un mayor número de empresas que se presenten a esta licitación, ya que no son indispensables en la ejecución del contrato, pero mejoran sustancialmente dicha ejecución.

Así, la adjudicación se ha dividido en criterios cuantitativos y cualitativos, pudiendo alcanzar una puntuación máxima de 100 puntos, repartiéndose de la siguiente forma:

- Oferta económica 80 %
- Criterios de mejora de los servicios 20 %

Criterio evaluable de forma automática por aplicación de fórmulas:

1.- Criterio precio: Hasta 80 puntos

Se asignarán 80 puntos a la oferta económicamente más ventajosa y 0 puntos a la oferta que se ajuste al presupuesto de licitación, y el resto de ofertas se valorarán proporcionalmente entre ambas puntuaciones, con aplicación de la siguiente fórmula:

$$Px = \frac{80 * (Oferta0 - Oferta x)}{(Oferta0 - Oferta1)}$$

Px: Puntuación resultante de la oferta en estudio

Oferta 0: Presupuesto base de licitación (IVA excluido)

Oferta 1: Oferta económica más baja

Oferta x: Oferta en estudio

La oferta que iguale el precio de licitación puntúa 0.

Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

A efectos de considerar una oferta anormal o desproporcionada respecto de las proposiciones presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el artículo 86.1 del RGLCAP se aplicará a las empresas de un mismo grupo que concurren separadamente a la licitación ya sea de forma individual o formando parte de una unión temporal de empresarias y/o empresarios.

Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

2.- Criterios de mejora en los servicios: Hasta 20 puntos

En este apartado se valorarán los criterios que se relacionan, con aplicación de la puntuación que a continuación se determina:

2.1. Criterios cualitativos evaluables en forma automática por aplicación de fórmulas matemáticas: Hasta 20 puntos

2.1.1. Poner a disposición del contrato, durante toda su vigencia, un espacio techado y cerrado, destinado a guardamuebles, cuyo uso será en exclusividad para Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades. Dicho espacio deberá contar con un servicio de video vigilancia 24 horas todos los días del año, debiéndose facilitar el acceso, previo aviso con antelación de 12 horas, al personal de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades autorizado, a demanda de las necesidades de ésta.
.....**Hasta 20 puntos**

- Si el espacio destinado al mencionado servicio tiene un tamaño de entre 100 y 250 m².....**4 puntos**

- Si dicho espacio tiene un tamaño mayor de 250 y hasta 500 m².....**6 puntos**

- Si el citado espacio es superior a 500 m2 **20 puntos**

(La empresa que no disponga de este servicio será valorada en este subapartado con 0 puntos)

Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.

Atendiendo a las prestaciones objeto de contrato, si procede, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sus modificaciones y desarrollo reglamentario.

En caso de que el licitador se presente en forma de UTE, el requisito anterior se entenderá cumplido cuando lo cumplan las empresas que la constituyen.

X. PENALIDADES Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación podrá acordar la inclusión, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de penalidades distintas a las enumeradas en el citado texto legal.

Dadas las características de este contrato y con el fin de impedir que posibles situaciones inesperadas a lo largo de su ejecución hagan necesario acudir directamente a la vía de resolución del contrato, se propone la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de las siguientes penalidades por los incumplimientos que a continuación se indican:

9.1 Penalidades por cumplimiento defectuoso

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP, estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato.

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la administración por daños y perjuicios originados por los incumplimientos del contratista.

Se consideran conductas susceptibles de penalidad, por ejecución defectuosa del contrato, las relacionadas a continuación que se clasifican en incumplimientos leves, graves y muy graves

Se consideran incumplimientos leves:

1. El retraso en la presentación de las facturas o el defecto en la cumplimentación de los datos de las mismas.
2. Las faltas de respeto a los usuarios y al personal que trabaja en los inmuebles objeto del servicio.
3. Cualquier otra falta no tipificada como de mayor gravedad.

Se consideran incumplimientos graves:

1. Las irregularidades en la prestación del servicio con arreglo a las condiciones fijadas en el pliego y a las condiciones contractuales.
2. La reiteración de dos o más infracciones leves en un periodo inferior a dos meses.
3. No disponer del personal y/o equipos previstos en cada servicio.
4. La entrega de los materiales en estado de deterioro.
5. El incumplimiento del deber de confidencialidad de datos.

Se consideran incumplimientos muy graves:

1. La no adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y materiales suficientes para la prestación del servicio.
2. La desobediencia reiterada a las órdenes dadas por el responsable de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, según el contrato.
3. La pérdida o extravío de los materiales objeto de transporte. En este caso, se penalizará con el valor del bien extraviado.
4. La reiteración de dos o más infracciones graves en un periodo inferior a dos meses.
5. El incumplimiento de los deberes del contratista establecidos en el presente Pliego, cuando hayan sido previamente exigidos por el responsable designado por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, para la supervisión de los trabajos contratados, una vez transcurrido el plazo de tres días de subsanación de defectos.
6. La prestación deficiente del servicio en dos o más centros educativos objeto del contrato.

Procedimiento para la imposición de penalidades:

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato, y será inmediatamente ejecutivo. Para proceder a la imposición de las penalidades indicadas será necesario que los incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por la Dirección de Área Territorial correspondiente.

De este incumplimiento se dará traslado al contratista para que realice las alegaciones oportunas en el plazo de 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será trasladada al órgano de contratación que resolverá sobre la imposición de la penalidad.

Las penalidades que se aplicarán a cada una de las infracciones definidas anteriormente son las siguientes:

Por infracciones leves:

1. La primera infracción leve será sancionada con carta de apercibimiento.
2. Las sucesivas con una penalidad de hasta el 5% del importe de facturación mensual correspondiente, por cada infracción producida y detectada.

Por infracciones graves:

1. Se podrá imponer una penalidad de entre el 6% y el 25% del importe de facturación mensual correspondiente, en función de los perjuicios que se produzcan y de las características de la infracción, por cada una producida y detectada.

Por infracciones muy graves:

1. La Administración podrá imponer una penalidad de entre el 26% y el 60% del importe de facturación mensual correspondiente, en función de los perjuicios que se produzcan y de las características de la infracción, por cada una producida y detectada.

Las penalidades podrán acumularse, sin que en su conjunto puedan superar el 50% del precio del contrato, IVA excluido, tal y como establece el artículo 192.1 de la LCSP. La comisión de más de un incumplimiento del contrato calificado como muy grave, dará lugar a la resolución del contrato. Así mismo, no solucionar un incumplimiento calificado como muy grave, en un plazo de tres días laborables, dará lugar a la resolución del contrato.

Las penalidades así previstas, se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista, en aplicación del artículo 194.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

9.2 Penalidades por incumplimiento de las condiciones de subcontratación

El importe de la penalidad será hasta el 25% de la parte subcontratada, según el artículo 215.3.a) de la LCSP.

9.3 Penalidades por incumplimiento de las condiciones formales del contrato

En esta tipificación se incluyen aquellos incumplimientos de obligaciones del adjudicatario referidas a aspectos inherentes a la actuación administrativa en cumplimiento del contrato.

Estas obligaciones se refieren, en concreto, a la de atender la prórroga del contrato a que está obligado, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 29.2 de la LCSP.

Así, cuando el contratista, habiendo recibido preaviso de prórroga, al menos, con

dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, rechazase la formalización de dicha prórroga. En este caso, la penalidad alcanzará el 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Es necesario establecer esta penalidad, ya que el único instrumento que podría garantizar su cumplimiento, deja de existir al devolver la garantía provisional, de conformidad con el artículo 106.4 de la LCSP, y no ser posible el uso de las garantías definitivas asociadas a cada contrato para finalidad distintas que motivaron su constitución.

9.4 Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de la ejecución del contrato

De conformidad con el artículo 192 el cumplimiento defectuoso de las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con los artículos 76.2 y 202.1 de la LCSP, darán lugar a la imposición de penalidades, que habrán de ser proporcionales a la gravedad del mismo. La cuantía de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, ni el total de las mismas superar el 50%.

XI. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

No proceden.

Madrid, a la fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Firmado digitalmente por: GARCIA RODRIGUEZ IGNACIO
Fecha: 2024.09.10 12:00

Fdo. Ignacio García Rodríguez